

Por un cambio de las políticas educativas y la renovación democrática

José Campos Trujillo
Secretario General FECCOO

LAS POLÍTICAS que, ante la crisis económica, financiera y social, se vienen aplicando en nuestro país, centradas en la reducción del déficit reduciendo a su vez el gasto público, han tenido consecuencias desastrosas en el sector de la enseñanza. El fruto de unas políticas restrictivas en la inversión educativa, caracterizadas pura y simplemente por los recortes del gasto, tienen un reflejo especialmente negativo en las plantillas docentes y del personal de apoyo, en la merma de la oferta de empleo público y en el recorte de los haberes de los funcionarios docentes.

En la misma errónea e injusta línea de medidas para reducir el déficit público, se echó mano del colectivo de funcionarios docentes, aplicándoseles desde junio de 2010 una reducción de sus haberes que se concreta para el profesorado del grupo A1 en un 7,5% de descenso efectivo de sus haberes, para el del grupo A2 en un 5,5%, y para el personal de los servicios educativos y complementarios con contrato laboral en un 5%. Estas reducciones de haberes también se extendieron al profesorado de la enseñanza privada concertada en la mayoría de la comunidades.

Urge retomar el principio democrático de la negociación colectiva, vulnerado en la práctica tanto por las administraciones educativas en el sector público, como por las patronales

Con buena parte de los Objetivos educativos europeos 2010 pendientes de conseguir, nos vemos abocados a encarar ya los objetivos educativos de la Estrategia Europa 2020 bajo el signo de estos recortes que en España este año rondarán los 1.800 millones de euros. Por ello, en la Federación de Enseñanza de CCOO iniciamos el curso con una campaña en contra de los recortes educativos, como los que ya han emprendido los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Murcia. La campaña estará encabezada por un Manifiesto-decálogo, articulado en 32 medidas, que resume los ejes prioritarios de nuestra actuación sindical y motivaciones para incorporar a los trabajadores de la educación a una más amplia movilización social. Entre éstas, destacamos el aumento de la inversión educativa, que pasa por dedicar a ésta un mínimo del 7% del PIB; incrementar la inversión en I+D+i, hasta llegar al 3% del PIB en 2020 y elaborar una Ley de Financiación del Sistema Educativo que, avalada por las comunidades autónomas, garantice en un plazo temporal limitado la suficiencia de recursos.

En cuanto a los trabajadores de la educación, en el Manifiesto exigimos que se restablezcan sus derechos laborales. Por otra parte, el recorte generalizado de plantillas, la cicatera tasa de reposición de jubilaciones, el aumento del alumnado sin que aumenten los efectivos docentes al menos en la misma proporción, deriva en una sobrecarga horaria para todo el profesorado. Mientras tanto, sigue aparcado el Estatuto de la Función Pública Docente y continúa bloqueado el actual convenio de la enseñanza concertada que caducó hace 30 meses.

Ante esta situación urge retomar el principio democrático de la negociación colectiva, vulnerado en la práctica tanto por las administraciones educativas en el sector público, como por las patronales del sector de la educación privada, y la negociación inmediata del Estatuto de la Función Pública Docente entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales representativas del sector público.

Gran acto sindical en Palacio Vistalegre 24 de septiembre

EL PRÓXIMO día 24 Comisiones Obreras organizará en Madrid un gran acto sindical con el que pretendemos situar las grandes líneas estratégicas del sindicato, contempladas en el Manifiesto del 26 de mayo, ante un nuevo curso que se prevé complejo. El Consejo Confederal de CCOO ha hecho un llamamiento a todas nuestras organizaciones para garantizar el éxito de estas convocatorias de manera que España sea, nuevamente, una referencia en Europa de la capacidad de respuesta del movimiento sindical.

A mediados de mayo se celebró en Atenas el 12 congreso de la Confederación Europea de Sindicatos en el que se valoró la grave situación social generada por la crisis y por las políticas seguidas por las instituciones europeas. En concreto se criticó el contenido del Plan de Gobernanza y el Pacto por el Euro y se censuró la ausencia de políticas para abordar el mayor problema que tiene Europa, que no es otro que los 23 millones de parados y paradas registrados. Entre las propuestas alternativas acordadas destacan dar prioridad a la recuperación de la economía y la creación de empleo; enfrentar la crisis de las deudas soberanas, con medidas eficaces y solidarias; alargar los plazos para la reducción de los déficit públicos y hacerlo a través de medidas socialmente justas y defender el modelo social europeo.